



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

### SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE NRO: 22229/2023

**AUTOS: “SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Buenos Aires,

### VISTOS Y CONSIDERANDO

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación de fecha 10/2/2023 deducido contra la resolución N° 2022-26320-APN -DRLF del 15/12/2022 que desestimó el recurso de impugnación administrativo deducido contra la Resolución N° 2021-3-APN-DRLF del 5/1/2021 que impuso una multa al actor, en virtud de las infracciones cometidas al artículo 40 de la ley 11.683.

Que notificada de ello, se le hizo saber que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 10 inc. b) de la Resolución METySS N° 655/05 y sus modif.

Que al momento de la elevación de las actuaciones a esta Alzada se informó que el contribuyente depositó la suma reclamada, es decir que se encuentra cumplido el requisito del pago previo de la multa impuesta. (Conf. art. 15 de la ley 18820).

Que surge de autos que los demás requisitos formales para la apertura de la instancia se encuentran cumplidos por lo que corresponde adentrarse en la cuestión de fondo.

Que el presente tiene su origen en el acta de relevamiento efectuada en el domicilio de la calle Tte Gral Peron 4190 de CABA donde funcionan dependencias del Hospital Italiano de Buenos Aires. Según las constancias de autos procedió a relevar a las personas que se encontraban en el lugar, siendo atendidos por la Sra. Andrea Soledad Piñeiro de la institución. Allí fueron relevados efectivamente 75 trabajadores según las actas de comprobación labradas.

Que ante el traslado de rito, tanto en las actas de audiencia de descargo como en el escrito impugnatorio, en el recurso de revisión administrativo y en los agravios de su apelación, la entidad mencionada destaca que los trabajadores relevados no tienen con ella relación de dependencia alguna. Sostiene que los nombrados son trabajadores independientes con su debida registración en AFIP y se desempeñan como médicos de planta, médicos asociados, adscriptos, médicos honorarios, becarios y residentes según cada caso.

Que al efectuar su descargo además, acompaña documental referida a las personas relevadas que dan cuenta que las mismas se desempeñan como profesionales de la salud en las categorías mencionadas en el párrafo precedente. Ello es así pues obran en las actuaciones documentación respaldatoria de sus afirmaciones. Respecto de los médicos de planta, acompaña las distintas resoluciones emitidas por las autoridades competentes de la Sociedad Italiana que los nombran como tales. También respecto de los médicos adscriptos y honorarios. Por otra parte se acompañan los contratos de locación de servicios médicos, en relación a los médicos asociados, a los becarios y a los residentes.

Que asimismo, cabe señalar que obran en autos las actas labradas por el organismo donde constan las declaraciones testimoniales de algunos de los médicos citados donde manifiestan trabajar en forma independiente. Sostienen que no los une con el actor ningún tipo de relación de dependencia ya que han suscripto con él contratos de prestación de servicios por lo que ellos les facturan a las obras sociales, participan de las ganancias y se abonan su propio seguro médico entre otras particularidades.

Que en su apelación la parte actora se agravia fundamentalmente en que no se valoró la prueba documental por ella aportada y también que el organismo invocó la presunción consagrada en el art. 23 de la ley 20.744, entre otros items, destacando que en el



momento del relevamiento las personas en cuestión se encontraban desarrollando las tareas propias de su profesión.

Que por otra parte, en sus argumentos sostiene que las personas relevadas no son trabajadores en relación de dependencia sino que como profesionales de la salud revisten el carácter de autónomos y encuaran en lo dispuesto en el art. 11 inc.b) del Decreto 2104/93 y en el art. 1 apartado 2) inc.b) del Decreto 433/94 que reglamenta el art. 2 de la ley 24241.

Que en tales condiciones, cabe destacar que cuando de profesiones liberales se trata, la determinación de la existencia de relación de dependencia dependerá de las alternativas probatorias disponibles, no resultando acertado partir de premisas fijas, sino del análisis de la particular situación en cada caso.

Que no ha de perderse de vista que el actuar de la administración no puede subsumirse en una mera revisión contable, pues ello importaría una inversión en la carga de la prueba (cfr. Wassner, Roberto, "Trámites, procedimientos, recursos administrativos y judiciales en previsión social, pág. 104 y ss.). La presunción "juris tantum" de la existencia de la relación laboral en sentido estricto, como tal, debe verificarse al extremo, pues ello fundará una decisión administrativa de neto corte punitivo. En ese actuar debe imperar el principio de verdad material o real, llevando a cabo las medidas que se consideren conducentes para incursionar a fondo en la realidad económica analizada (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 29.05.97, "Cooperativa de Provisión para Puesteros La Armonía").

Que de las constancias obrantes en autos, surge que el organismo no verificó la existencia de un verdadero un poder disciplinario del contribuyente respecto de los profesionales mencionados y tampoco cómo era el desenvolvimiento efectivo de los mismos o la existencia de servicios presentados en otros ámbitos de la salud. Además existe en autos abundante prueba documental que da cuenta de los dichos del accionante y que no han sido objetadas por la administración, ni intrínseca ni extrínsecamente.

Que a mayor abundamiento cabe señalar que compartimos la doctrina emanada de la Excma. Corte Suprema en el fallo "RICA CARLOS MARIN C/ HOSPITAL ALEMAN" donde se sostuvo que los profesionales de la salud " constituyen la columna vertebral del hospital y son responsables de su nivel científico y asistencial por lo que, si bien dichos profesionales prestan servicios médicos y respetan y cumplen directivas y horarios estipulados por quienes los contrataron las mismas no son concluyentes para acreditar un vínculo de subordinación con la institución." Ello es así pues las pautas e indicaciones de trabajo son una consecuencia necesaria para el correcto funcionamiento y organización del sistema médico asistencial sin que por ello se viera alterada la naturaleza autónoma de los servicios comprometidos.

Que respecto de los Becarios y Residentes Médicos rigen las normas de la ley 22127, por ello la actora acompañó la documental correspondiente a sus condiciones con los contratos respectivos. En este caso su finalidad es formativa y de especialización profesional por lo que no cabe atribuir a esa relación dependencia alguna con la institución en la cual se desempeñan, ya que la intención del desarrollo de su actividad es el aprendizaje y la especialización profesional.

Que en este contexto, consideramos que lo profesionales de la salud son trabajadores independientes en todas las categorías antes señaladas. (Conf. lo resuelto por la Sala II de la Excma. CFSS en autos " SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA DE BS AS C/ MTEYSS S/ IMPUGNACION DE DEUDA" expte N° 31114/2019 del 2/11/2021.). Por ello, sostenemos que la actividad profesional de las personas relevadas y que son fundamento para aplicar la multa impuesta por el organismo no fue llevada a cabo en el marco de un contrato de trabajo en relación de dependencia entre los profesionales médicos y la actora por lo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la resolución administrativa cuestionada. Asimismo, se ordena la devolución del depósito ingresado en cumplimiento de los arts. 9 de la ley 23.473, 15 de la ley 18.820 y 39 bis del Decreto Ley 1285/58, con más el interés que resulte de aplicar la tasa pasiva para el uso de la justicia que publica el BCRA.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

Que en cuanto a las demás cuestiones planteadas en el presente recurso, omitimos pronunciarnos por razones de brevedad y en atención a la forma en que se resuelve el presente pues compartimos lo expresado por el Alto Tribunal en el sentido que... “los jueces no están obligados a tratar todas las argumentaciones de las partes sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la solución de la controversia y el fundamento de sus conclusiones” ((Conf. CSJN en autos " Wiater Carlos c/ Estado Nacional- M° de Economía s/ proceso de conocimiento" y Doctrina de Fallos: 307: 2216 entre muchos otros).

Que por ello, el Tribunal **RESUELVE** : 1) Hacer lugar al recurso de apelación deducido y revocar la resolución cuestionada; 2) Ordenar la devolución de las sumas depositadas en cumplimiento del requisito de pago previo con más el interés que surja de aplicar la tasa pasiva del BCRA ; y 3) Sin costas en la Alzada (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la publicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 10/25 y, oportunamente, remítase.

**SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DRA. NORA C. DORADO NO SUSCRIBE LA PRESENTE POR ENCONTRARSE EN USO DE LICENCIA. (Art. 109 del RJN)**

